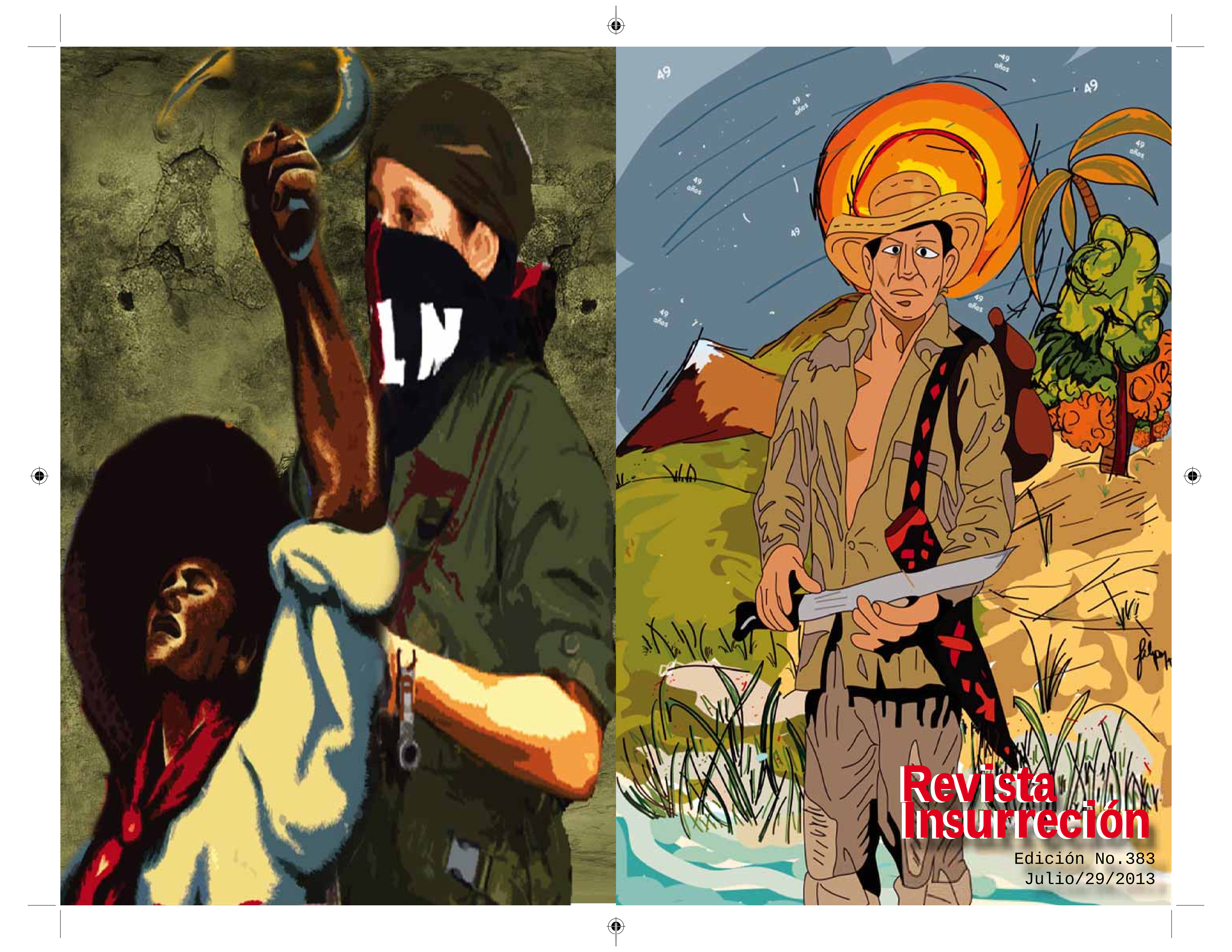

Revista
Insurrección
Edición No.383
Julio/29/2013

# SUMARIO






Anoche, unidades guerrilleras del Frente Darío Ramírez Castro, atacaron con explosivos la base de los paramilitares, localizada en La Pesquera, dentro del casco urbano de San Pablo, Sur de Bolívar.

Denunciamos ante la opinión pública el despliegue militar y paramilitar que hacen las fuerzas del gobierno, con el que buscan el rescate militar del geólogo canadiense.

¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

Dirección del Frente Darío Ramírez Castro

Ejército de Liberación Nacional

Serranía de San Lucas

Julio 25 de 2013





## [Comunicado N.8]
# Las Muestras de Buena Voluntad Canadiense

Los noticieros de ayer anunciaron que la empresa canadiense Braewal Mining Corporation, se dispone a devolver dos de los cuatro Títulos mineros, que había despojado a sus legítimos dueños, las comunidades del Sur de Bolívar.

Esta muestra de buena voluntad aproxima el día de la liberación de su vicepresidente de exploraciones, el geólogo canadiense Jernoc Wobert, retenido preventivamente por nuestras fuerzas guerrilleras, en la mina de oro de Casa de barro, desde el 18 de enero pasado.

Mantenemos la decisión de encontrar una salida negociada a este problema y esperamos que se pueda resolver pronto, para que el ciudadano canadiense pueda retornar al seno de su familia.

La situación militar del Sur de Bolívar sigue crítica por los operativos de fuerzas militares y paramilitares del gobierno de Santos.

Han llegado numerosas tropas paramilitares a los alrededores del corregimiento de Puerto López, tras el ataque que les hicimos el 25 de mayo. Los refuerzos llegaron del sur de Córdoba, en camiones que pasaron por los puestos de control militar de La Apartada, Caucasia, Puerto España, el puente de Angostura sobre el río Nechí y el Batallón de ejército de Bagre. Para instalarse en Malena, la confluencia de los ríos Bagre y Tiguí y en el propio Puerto López.









# El Catatumbo y Lo que Sigue

Al paro campesino del Catatumbo, que lleva más de un mes y un saldo de 4 campesinos muertos y cerca de 20 heridos por la fuerza represiva, se ha sumado el paro de los pequeños mineros, que en su primer día (17 de julio) ha dejado el balance de 2 mineros muertos.

Al igual que con los campesinos del Catatumbo, la respuesta de Juan Manuel Santos a los mineros ha sido la de reducir la protesta a un problema de orden público y reprimir. Así se enfoca la retórica del gobierno, menospreciando las legítimas peticiones de los campesinos y los mineros, estigmatizándolos y señalándolos como infiltrados por la insurgencia, creando un ambiente en la opinión, propicio para la represión violenta.

El tratamiento que el gobierno le da a las protestas sociales – es decir, a la política sin armas de los sectores populares, es el verdadero laboratorio político que define si existe realmente una voluntad de paz por parte del establecimiento.

Santos aplica con los manifestantes la misma fórmula que aplica con la insurgencia; A los campesinos y mineros les exige que cesen las protestas y los bloqueos para luego hablar del contenido o pliego petitorio, a la insurgencia le exigen que se desarme y se desmovilice para luego hablar de cambios políticos.





Ignora el gobierno que los campesinos y mineros, tuvieron que recurrir a los paros y bloqueos después de haber agotado las vías institucionales y burocráticas para lograr que el gobierno atienda sus demandas, es decir, la protesta ha sido su último recurso.

La protesta social, la toma de carreteras es el mecanismo de presión que le queda a los movimientos sociales. Es gracias a ello que el gobierno les presta atención.

Como ELN, hemos insistido que el día que en Colombia se pueda hacer una verdadera oposición política al régimen, sin correr el riesgo de caer víctima de la violencia exterminadora estatal o para-estatal, la guerrilla no tendría razón de ser y en esas circunstancias dejaría de existir por fuerza de la realidad misma.

Pero la realidad es otra, el alzamiento en armas de importantes sectores de las juventudes revolucionarias se da precisa-



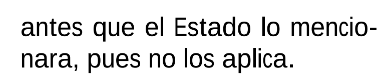
ta la confidencialidad, pero se desboca por hacer público lo que le conviene, busca la paz incrementado las operaciones militares, se niega a acordar un cese al fuego bilateral, pero si pretende que la insurgencia renuncie a su accionar; es decir quiere un proceso con amplias ventajas para el establecimiento.

Un grave problema en el camino hacia la paz es que el Estado no tiene una política de paz y ello lleva a que los funcionarios de turno manejen a su antojo tan delicado asunto y de paso excluyen los aportes de la sociedad; hoy para Santos como ayer para otros gobiernos, la paz es el desarme, la desmovilización de las guerrillas, sin ningún cambio estructural.

Todo lo anterior unido al bárbaro y criminal método usado por el Estado contra los pobladores movilizados, señala su visión anti popular con que gobierna y pretende resolver los graves problemas del país.

Reiteramos la disposición de hablar y dialogar sobre la base del respeto mutuo, sin condicionamientos; cualquier tema, la agenda de país se irá construyendo y será parte importante de ella las necesidades que las comunidades ayer y hoy demandan.





antes que el Estado lo mencionara, pues no los aplica.

Hemos insistido en la necesidad de la Humanización de la Guerra, que significa acordar normas en lo más crítico del curso de la guerras, pues al no asumirse se camina al despeñadero, que fue lo que no midió el Estado, al agenciar el paramilitarismo y vincularse al narcotráfico.

La mayoría de los colombianos y colombianas exigen cambios y transformaciones profundas las cuales motivaron el alzamiento armado y que continúan vigentes; sin embargo, el gobierno ha manifestado reiteradamente que en un proceso de diálogo el modelo económico no será tema de agenda, esta posición evidencia el propósito de no afectar los intereses de la clase dominante en el país y seguir manteniendo el sistema de privilegios de los ricos, la explotación de la clase trabajadora y la entrega del país al capital transnacional.

Entre tanto todos los condicionamientos que Santos vocifera, dejan ver la falta de voluntad del gobierno para acordar cambios de fondo. El gobierno se empeña en un acuerdo de forma, sin ir a la esencia de los problemas que originaron y profundizan el conflicto.

El gobierno ha ideado un esquema de paz y pretende que la insurgencia lo acepte. Le gus-



mente, porque en Colombia hacer política de oposición ha sido históricamente imposibilitado por la oligarquía.

Detrás de la retórica y la postura del gobierno, están los compromisos adquiridos con el gran capital, con las empresas extractivas, a las que le ha prometido los territorios nacionales con amplias garantías y seguridad para la inversión.

El 19 de agosto el Movimiento de la Dignidad Cafetera reiniciará las protestas ante el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados en marzo. ¿Cuál será la respuesta del gobierno ante esta protesta? ¿Reproducirá el mismo guion que con los campesinos y los mineros?

Otras expresiones populares y sociales, se alistan para nuevas jornadas de lucha y el gobierno de Santos no tiene otra opción que la represión salvaje.

Eso es lo que caracteriza un gobierno que hizo de la paz su permanente retórica.







Jorge Mario Castro Mejía



# ¿Dialogo con Condiciones?

Hemos sido claros en plantear la urgencia y aportar para construir una política de Paz, mediante el diálogo y la Solución Política al Conflicto social y armado que vive el país por más de 50 años.

Somos una fuerzas insurgentes que ha resistido y luchado buscando siempre respaldar y acompañar las luchas y organización del pueblo y la nación en pro de las transformaciones que demanda las mayorías.

En los momentos en que hemos dialogado con los gobiernos de turno, hemos planteado que es indispensable que en dichos esfuerzos haya reconocimiento mutuo, teniendo en cuenta que somos dos fuerzas contendientes que nos plantamos el propósito de buscar la paz.

En el transcurso de tales diálogos, gobiernos y los grandes medios de información, han sido reiterativos en que la insurgencia debe hacer gestos unilaterales de buena voluntad, como expresión de querer la paz.

No hemos somos partidarios de tales solicitudes por considerarlas un condicionante, en la medida que esta misma exigencia no se le hace al gobierno. Pero además, cuando la insurgencia se ha dispuesto a ello, tanto el gobierno como los grandes medios de información lo han interpretado como debilidad y ese manejo ha consecuencias nefastas que ellas tienen para la nación y proponer una política soberana en el manejo de los recursos naturales y energéticos, y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad.

El Bien común o Buen vivir es el objetivo de los gobiernos democráticos del continente, mientras en Colombia, la oligarquía ha sabido administrar la guerra junto a sus privilegios, a costa de la miseria y hambre de las mayorías.

En Colombia hace muchas décadas se le envolató a la oligarquía el constituir el país nacional, somos un país de ciudades y regiones donde a la mayoría de la población se le niegan y desconocen sus derechos elementales como ciudadano; debido eso es urgente la búsqueda por construir entre toda la comunidad nacional, un Nuevo País que sea gobernado por la ley de las mayorías.

La “ley” de la oligarquía, como elite minoría, no puede ser jamás la “ley” para las mayorías; tendríamos que legislar con una vocación de participación popular y directa; superar la exclusión política implica cambiar el esquema y metodología de la supuesta democracia representativa que hizo crisis en las democracias burguesas.

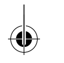
Colombia es uno de los países más desiguales y leguleyos, donde cada rato se hacen reformas para acomodarlas al antojo y privilegios oligárquicos y justificar la guerra contra la oposición política.

Es dentro de ese contexto que Santos le dijo a los militares: “ La victoria es la paz”

El ELN reconoció la aplicación del DIH desde mediados de los años 80, El Protocolo II referido a los Conflictos Internos, muchos años










masacres haya verdad justicia y reparación o por lo menos que el gobierno empeñe su palabra en iniciar una verdadera investigación.

Consideramos sin embargo, que todos los asuntos a tratar y resolver, son precisamente los temas de una mesa y no condición para que esta se establezca.

Las locomotoras del modelo de acumulación para "la prosperidad del capital" del gobierno de Juan Manuel Santos, consiste en permitir el saqueo de las Empresas Transnacionales del carbón, oro, petróleo, níquel, cobalto y tungsteno entre otras; para reemplazar la crisis del agro: café, maíz, arroz, cacao, papa, y todo lo que los TLC han arruinado en la industria y agricultura colombiana; a esta barbarie y sus consecuencias es que llamamos crisis social y humanitaria. En ese contexto, la lucha por una Nueva Nación crece y continúa. Con diálogos o sin ellos la represión se mantiene y también crece.

La minería a Gran escala, fuera de ser un saqueo, es un robo descarado a la nación lo cual ha generado enorme ola de protestas que crecerá día a día. La solución para Santos y su gabinete es aumentar el píe de fuerza de los batallones contraguerrilla, batallones energéticos y los contingentes criminales de escuadrones antimotines.

Una de las banderas de lucha del ELN es la defensa de la soberanía nacional, en esa dirección ha realizado acciones fuerza y el respaldo a las luchas populares para confrontar la política entreguista de los diferentes gobiernos, denunciar las






desgastado tal figura de modo que está invalidada.

Hoy cuando tal pretensión persiste, debemos expresar lo siguiente:

El Estado Colombiano fue quien impuso leyes del capital con sus desigualdades, miseria y explotación de las grandes mayorías en beneficio de unos pocos ricos y las Empresas Transnacionales mediante la exclusión política, la violación de los derechos humanos, la persecución política y la criminalización de la protesta social que son, entre otras, las causas que siguen alimentado el conflicto social y armado.

La guerra sucia y el terrorismo de Estado han sido políticas sistemáticas durante décadas. Los gobiernos sucesivos han acudido a la acción legal e ilegal a la hora de reprimir y silenciar la voz popular, de truncar las posibilidades de cambio y transformación en el país.

Más de 5 millones de desplazados, 1982 masacres en los últimos 50 años, cometidas por paramilitares y militares, en su gran mayoría, y más de 25 mil desaparecidos son un doloroso testimonio de las políticas oficiales.

¿No podríamos nosotros poner como condición para iniciar un dialogo, que retornen los desplazados? no solo a un pedazo de tierra sino con plenas garantías brindándole las demás condiciones que los repare a plenitud.

También podríamos plantear que aparezcan los desaparecidos y que sobre estas 1982


ELN
Siempre junto al pueblo